

Editorial

CON IMPUNIDAD, NO HAY PAZ

El pasado 18 de mayo la prensa nacional dio a conocer el fallo de la Corte Constitucional sobre la mal llamada "Ley de Justicia y Paz", o Ley 975.

Dice la prensa que de 34 artículos que contiene esa ley, fueron declarados inexecutable dos: el que concede a los paramilitares la calidad de "disidentes políticos" y el que rebaja las penas por todos los delitos cometidos por los paramilitares que se acogieron a la desmovilización, durante el transcurso de las hostilidades.

Según el fallo emitido por la Corte, los paramilitares no pueden ser procesados como "disidentes políticos", si no como delincuentes comunes. Eso quiere decir que no pueden ser objeto de exoneración por la vía del indulto, o de una posible amnistía. Pero de la efectividad de la aplicación de esta decisión jurídica no hay seguridad, pues el fallo lo tomó la Corte no porque el artículo referido sea inconstitucional, si no porque tiene vicios de procedimiento.

En cuanto al artículo de rebaja de penas, sí hubo una decisión en firme, en tanto esa medida preferencial con los paramilitares no cubre los casos que hayan sido juzgados antes de la promulgación de la ley. O sea, que para algunos jefes paramilitares que ya estaban condenados por masacres y asesinatos los jueces deben hacer cumplir esas penas.

El hecho de que la Corte haya tomado esta decisión a pocos días de las elecciones es a todas luces un acto político en contravía a la reelección, pues enreda el compromiso de Uribe con sus patronos narco paramilitares, al no poder garantizarles impunidad y estatus político. Esto puede incidir en el caudal electoral que ya sabemos tiene asegurado Uribe por parte de estos sectores que intimidan y compran electores.

Si los paramilitares pierden su estatus político y son tratados como lo que son, quedan a las puertas de la extradición. Por esto, podemos interpretar el fallo, como una presión de los gringos hacia Uribe, para tenerlo más atado en estos y otros asuntos, o como un guiño para con alguno de los otros dos candidatos.

Es posible que entre los juristas y los políticos colombianos quede algún mínimo sentido de justicia. Otro factor que no debe olvidarse, es que todos los magistrados son cuota de los partidos tradicionales, en sus diferentes vertientes. Al parecer los serpistas y pastranistas, que son mayoría en la Corte, quieren desquitarse de Álvaro Uribe Vélez, emitiendo este fallo una semana antes de las elecciones.

Esta decisión podemos verla también como una lavada de manos para salir del paso, ante las presiones de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, incluida la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, de las organizaciones populares y de las ONGs que exigen justicia, verdad y reparación.

Una Corte que se respete debería llamar a los hechos por su nombre: crímenes de guerra y de lesa humanidad. No otra cosa son los cientos de masacres, los miles de asesinatos políticos, la "limpieza social" en las ciudades, los millones de hectáreas de tierra robadas, los 3 millones de desterrados. Estos hechos debemos recordarlos a diario.

De las atrocidades cometidas no solo son responsables los autores materiales como los Castaño Gil, Mancuso, Ernesto Baez, Macaco y los demás jefes de bandas. También son responsables los Estados Unidos, los gobiernos, los ganaderos, las fuerzas militares, y por tanto deben ser investigados y penalizados.

Queda otra enseñanza: que mal paga el imperialismo a quien bien le sirve. Usó a los paramilitares y ahora los criminaliza.

Aunque el fallo tiene algo de positivo, no debemos olvidar que la lucha por reparación, justicia y verdad es de largo aliento y que el objetivo se logrará, si de él se apropian todas las organizaciones sociales y el movimiento político de oposición.

Es nuestro deber como militantes revolucionarios hacer una permanente labor de claridad política, investigación y profundización sobre la verdad, para que entre todos los sectores del país luchemos por la derogación de la Ley 975. Para que hayan condiciones de paz en nuestro país, un factor esencial es que no haya impunidad y, sobre todo, que el crimen no sea un método de la lucha política.

Coyuntura Nacional

MENTIRAS QUE MATAN

Dice el editorial del diario "El Tiempo" del domingo 21 de mayo: "En medio de un agitado panorama social y sindical, culmina hoy la campaña presidencial, que ha resultado bastante atípica. No sólo por contar por primera vez con un candidato-presidente sino por las cosas buenas y menos buenas. Entre las primeras, cabe destacar que ha sido la menos violenta de los últimos 15 años. Innegable avance en un país donde en las presidenciales de 1990 asesinaron a tres candidatos a la presidencia, en 1998 y 2002 abundaron los atentados terroristas y los crímenes políticos".

Las "verdades" de la prensa oficial distan mucho de la realidad: el 27 de abril fue asesinada Lilibian Gaviria, hermana de César Gaviria, jefe del Partido Liberal en la oposición. Por esos días es encontrado muerto el sociólogo Jaime Gómez, asesor de la senadora liberal Piedad Córdoba.

En el departamento de Córdoba fue asesinado uno de los asesores de Carlos Gaviria, candidato del Polo Democrático Alternativo.

El viernes 12 de mayo, en Mingueo (Guajira), cayó Marcelino Pacheco Malo, indígena Wiwa de 29 años. Marcelino era líder de la organización indígena Wiwa Yugumain Bunkuanarrua Tayrona. El 16 de mayo asesinaron a Pedro Coscués, en el resguardo indígena "La María", en el momento en que su comunidad se enfrentaba a la Policía, que pretendía desalojarlos de sus tierras.

El 20 de mayo, "El proceso de unidad popular del sur occidente colombiano", solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que hicieran presencia en el Patía y el Rosal (Departamento del Cauca), así como en Remolinos, Satinga, Iscuandé, La Tola, El Charco, Barbacoas y Guayacona (Departamento de Nariño), ya que en estas localidades la policía nacional y el ESMAD estaban reprimiendo a los manifestantes que protestaban contra el TLC, el Plan Colombia y la reelección de Uribe.

Por esos días un autodenominado "Comando Nororiental" y firmado como "Colombia libre de izquierda", envió amenazas de muerte a las organizaciones sociales ASOCBARI, (Asociación de Cabildos del Pueblo Indígena Bari del Catatumbo), a la Organización Femenina Popular, al Comité de Interlocución de la Red de Justicia Comunitaria.

En la ciudad de Medellín (Antioquia) se denunció que 32 personas que fueron presentadas por la IV Brigada como "guerrilleros dados de baja en combate" eran en realidad ciudadanos que nada tenían que ver con la insurgencia. Según las organizaciones sociales de esta ciudad "los crímenes son cometidos por militares afanados por presentar resultados "positivos" a sus superiores".

El presidente de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) Luís Evelio Andrade, denunció que desde helicópteros artillados Black Hawk dispararon gas pimienta sobre más de 10 mil indígenas y afro descendientes que protestaban en Remolinos (Nariño), produciendo la muerte de una señora mayor y un niño.

El 8 de mayo se denunció que los paramilitares han amenazado de muerte a los miembros de la Corporación Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo", a los del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), ONIC, Central de Trabajadores de Colombia (CUT), Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo.

En el municipio San Juan de Arama (Meta), denunciaron que tropas de la Brigada Móvil XII han iniciado un intenso operativo contra los campesinos de la región, a quienes sindicaron de ser colaboradores de la insurgencia.

El 18 de mayo fue asesinado un concejal de Apartadó, quien un día antes se había adherido a la campaña del Maestro Carlos Gaviria.

La principal distorsión hecha por las empresas de comunicación al servicio del establecimiento en Colombia, consiste en difundir la idea que en la actual coyuntura política el país "es un remanso de paz", a causa de la aplicación de la política de la "seguridad democrática" del presidente Uribe.

Las empresas comunicacionales fabrican sus propias mentiras y crean sus propias fantasías: “estamos ante las elecciones menos violentas en 15 años”. Ver para creer: la sangre de los humildes, los crímenes contra las fuerzas sociales y organizaciones de izquierda no son considerados “hechos de violencia”.

La derecha moldea la realidad y la cosa funciona: no cesan de glorificar a su presidente – candidato, sus fracasos (como el Plan Colombia) son presentados como triunfos.

Respecto a la ofensiva militar y paramilitar contra la población, los medios de comunicación manifiestan una ausencia total de espíritu crítico, o al menos de objetividad en la información. Es obvio que mientras se sigan considerando “legítimos” los actos sanguinarios contra el pueblo colombiano, como los ocurridos en la actual campaña electoral, sectores importantes de éste se organicen y den respuestas militares a los agresores.

En Colombia, desde tiempos inmemoriales se viene confirmando la teoría expuesta por el Profesor Murria Rothbard, de la Universidad de las Vegas, quien afirma que: “el Estado es la más vasta y más formidable organización criminal de todos los tiempos, más eficaz que cualquier mafia en la historia”.

Suele ser habitual en nuestro país que a los medios y a la clase política les parezca que las acciones organizadas por el movimiento social, reclamando sus justos derechos, son “terroristas”, o “proclives al terrorismo” o apéndices del “narco-terrorismo” y, sin embargo, no les resulta nada reprobable la violencia paramilitar, la guerra del Estado contra los pobres, los asesinatos que a diario se cometen contra los luchadores sociales.

Se escandalizan porque la izquierda presenta un candidato que no lanza fuegos contra la insurgencia guerrillera, pero glorifican y endiosan a un presidente – candidato que le declara la guerra a sus compatriotas, a los países vecinos (casos Venezuela y Ecuador) y que constantemente está pidiendo ayuda internacional para ganar “de una vez por todas”, como lo dicen desde hace 50 años, una guerra que no reconocen.

En nuestra historia los dueños del poder siempre han tendido a ocultar la verdad, pero las élites que cultivan la mentira como forma de perpetuarse cavan con ella su propia sepultura.

Nuestros muertos claman justicia, la verdad prevalecerá por encima del engaño y las mentiras de las élites y sus empresas de comunicación.

Coyuntura Nacional

TLC ENTRE COLOMBIA Y ESTADOS UNIDOS: UNA VERGONZOSA FARSA

¿Qué favores le deberá Álvaro Uribe a la élite que gobierna Estados Unidos para que de manera tan sumisa le esté facilitando sus planes, aún en contra de la

voluntad del pueblo colombiano y de otros pueblos y gobiernos latinoamericanos?

Esta es la pregunta elemental que cualquier persona se hace al informarse, solo por encima, del proceso de firma del Tratado de Libre Comercio entre los dos países y de cómo Uribe se las arregla para que el sueño de realizar el ALCA no se le frustre del todo a Bush y sus secuaces.

Luego de casi dos años de utilizar como táctica burlas, engaños, bravuconadas, incumplimientos y arrogancia de la delegación norteamericana, se firmó a marchas forzadas el tal tratado (27 de febrero de este año), que fue un pacto de tiburón con sardina, y ahora resulta que la humillada pero feliz delegación de Colombia tuvo que regresar en la segunda semana de mayo a revisar el "acuerdo" porque los gringos lo cambiaron.

El gobierno colombiano ha publicado unos textos del TLC que no son los reales y que además no presentan el tema agrícola que es uno de los más sensibles y por tanto de los más controvertidos.

Dicen que donde más hubo cambios fue en los de agricultura y por supuesto que los cambios fueron a favor de ellos.

Como cosa normal, los gringos no acudieron a la cita para la revisión de textos a pesar de que el gobierno de Colombia había acordado una fecha con Richard Crowder, el encargado de asuntos agrícolas.

Dicho señor no apareció y mandó a Mary Latimer, quien fue la responsable durante el proceso de negociación de ese mismo tema y que se hizo famosa por su prepotencia y porque no atendía a los colombianos y se iba para la peluquería, llegaba tarde o no llegaba, sin más explicaciones.

Así como el texto real acordado solo lo conocen la comisión que negoció al país y el gobierno, las alteraciones que le introdujeron los yanquis también solo las conocen ellos. Dentro de lo poco que se ha informado, hay cambios sustanciales en lo referente a las cantidades, los tiempos fijados para eliminar los aranceles e incluso en los esquemas para negociar productos como el azúcar, carnes y cereales como el arroz, arvejas y el frijol, entre otros.

Las modificaciones según informes de los sectores afectados, son importantes y favorecen de manera abierta a los empresarios y transnacionales de Estados Unidos.

Por ejemplo ya no solamente venderán a Colombia ropa usada, repuestos automotores, y cuanta chatarra digan que es reciclada, sino también gallinas viejas.

Según la conocida expresión del jefe del equipo negociador, Hernando José Gómez, "hubo avances" durante las reuniones con la Latimer, pero la verdad fue que los gringos suspendieron la revisión de los textos porque tenían que ir a Europa y dejaron a los colombianos esperando hasta que ellos quieran retomar el tema, pues no fijaron fecha para nuevo encuentro.

¡Qué vergüenza sentiría cualquier colombiano con un poco de dignidad ante este plantón y la arrogancia sin límite! De verdad que ya se pasa de la raya el arrodillamiento del gobierno de la "seguridad democrática".

Ya hay denuncias sustentadas de que el TLC se está implementando en nuestro país sin haber sido aprobado por las instituciones correspondientes. Las privatizaciones de empresas rentables para el país como TELECOM, ECOPETROL, Empresas Públicas de Medellín y larga lista que le sigue, así como las reformas que han cursado y cursan en el Congreso, están de hecho adelantando en renglones importantes el TLC, es decir, este va o va.

Pero además de esto, ahora Uribe se ha empeñado en firmar un tratado de comercio con Guatemala, Honduras y El Salvador, cuya primera reunión se efectuará entre el 5 y 9 de junio.

El caso no es tan inocente, pues existe un anexo al TLC con Estados Unidos que anticipa que cuando Colombia llegue a un acuerdo comercial con otro país y éste contemple más facilidades que las acordadas con ellos, automáticamente las toman, eliminando las acordadas en el tratado bilateral.

Esta será la vía para que de alguna manera, aunque sea restringida en relación al plan original, se realice el ALCA, por lo menos con algunos países centroamericanos que a su vez ya tienen firmado un tratado bilateral con los gringos (CAFTA), aprobado en dura batalla en el Congreso norteamericano y en total desacuerdo con la voluntad de los pueblos de esos países.

Uribe pues, luego de acabar de hundir a Colombia será el facilitador para este proyecto recolonizador, si lo dejamos.

Ya la Comunidad Andina de Naciones (CAN) se quebró por causa del TLC con los EE.UU., cosa que advertimos desde estas páginas recién empezaron las rondas de negociación con Ecuador, Perú y Colombia.

No descartamos nuevas acciones de orden comercial impulsadas por Uribe para tratar de torpedear al MERCOSUR, al proyecto del ALBA y a cualquier intento de integración que no sea con el imperio, como tampoco descartamos la viabilización de acciones militares contra los gobiernos sudamericanos que están actuando con plena soberanía.

Sin duda la tendencia es a la polarización en América Latina donde, tristemente para los colombianos, el polo pro imperial lo encabeza Álvaro Uribe.

Las crecientes marchas y protestas en nuestro país tienen pues razones de fondo y demuestran que a pesar de los mentirosos discursos del presidente, de las ya tontas intervenciones del ministro Jorge Humberto Botero, los colombianos tenemos conciencia de la traición a la patria que se está consumando.

La lucha contra la reelección, contra la aprobación en el Congreso del TLC, contra la descarada y grosera burla de los gringos, está por todos los rincones del país y crecerá sin dudas porque la dignidad de la mayoría se impondrá ante el espíritu lacayo del gobierno y la minoría oligárquica.

Coyuntura Nacional

LAS MOVILIZACIONES DE MAYO: CRECE LA PROTESTA POPULAR

Colombia ha venido agitándose a raíz de la profundización de la injusticia social, la represión, la pérdida de soberanía y la impunidad. Durante los últimos días grandes movilizaciones, paros y huelgas lideradas por diversos sectores de la población han sido noticia.

Unos de los puntos de partida ha sido la Cumbre Nacional Itinerante de Organizaciones Sociales, realizada el 13 de mayo en el área de la Maria-Piendamó (Cauca).

El 15 de mayo el Proceso de Unidad Popular del Sur Occidente colombiano, alrededor del cual se mueven innumerables organizaciones, convocó a más de 15 mil personas procedentes de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo (al sur occidente del país).

“Por la vida en nuestros territorios seguimos en resistencia” ha sido parte del grito que miles de indígenas, campesinos y afro colombianos expresaron. Consigna que se agiganta y se encarna en la lucha popular por la defensa de la vida digna y de la soberanía nacional.

A estas importantes jornadas se sumaron los sindicalistas, los estudiantes, los maestros, organizaciones políticas y sociales, como respuesta al llamado de unidad hecho desde la preparación de la jornada.

El rechazo absoluto a la eventual reelección de Uribe Vélez, a la Ley de Justicia y Paz y a la firma del TLC con los Estados Unidos, constituyeron las consignas agitadas en las carreteras, pueblos y ciudades por donde peregrinaron las marchas.

Los Caminantes de la Palabra, como se autodenominaron los marchantes, tienen claro que la “seguridad democrática”, que tanta sangre inocente ha costado a los trabajadores del campo y la ciudad, puede en un momento dado prolongar su acción perversa por los siguientes cuatro años.

El Proceso de Unidad del Sur Occidente colombiano ha servido para volver a transmitir la fe y la fuerza a los miles de manifestantes que, seguros de sus convicciones de justicia y dignidad, están mostrando la luz de la unidad, esa que tanto necesitamos los que creemos en la construcción de una nueva Colombia.

La represión cruenta, incluyendo el ametrallamiento perpetrado desde los helicópteros del Batallón Caicedo del Distrito Militar No. 57, los 500 efectivos del ESMAD y de la policía nacional, no pudieron contener las movilizaciones.

El asesinato de Pedro Coscué, guardia indígena de la Vereda Buenavista del Municipio de Corinto, cometido el 16 de mayo cuando defendía el derecho a su territorio, es un crimen por el que tendrá que responder el presente gobierno.

Más de medio centenar de heridos, detenidos y desaparecidos, ha sido el costo que se sigue pagando por causa de la represión y penalización de la protesta social, arbitrariedad aplicada una vez más en las movilizaciones realizadas en estos días.

Aún así, la batalla continúa y las exigencias de las comunidades indígenas son más vigentes. Han ratificado la lucha por la tierra, por el retorno a ella y por una reforma agraria popular.

Un ejemplo relevante de esta valentía lo dieron los indígenas Pijaos de la Comunidad de Balsillas (Municipio de Natagaima, departamento del Tolima), quienes luego de ver cómo les quemaron los ranchos comunitarios y sus cultivos de pan coger, como en tiempos de la conquista española, se levantaron de nuevo, recogieron la bandera y continuaron la marcha.

Pero no solo las comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas han sido protagónicas en estas jornadas de mayo.

En el Departamento del Meta se movilizaron 6 mil cocaleros para rechazar la fumigación con glifosato.

El 11 de mayo, 38 mil empleados de la rama judicial a nivel nacional se lanzaron al paro.

16 mil trabajadores del banano en Urabá preparan su huelga. Los mineros de la Drummond, Prodeco y Carbones de la Jagua desde el 17 de mayo están en huelga.

Otra exigencia al gobierno es el cumplimiento de los acuerdos en torno a la investigación y reparación de las masacres de Nilo, el Naya y la restitución de la represa de la Salvajina.

El llamado a la unidad del pueblo colombiano para dar la pelea en contra del modelo neoliberal ha sido una constante en todas las movilizaciones. Igualmente se ratifica la necesidad de unidad de acción con los hermanos del Ecuador y del Perú que vienen luchando contra el TLC.

La solución política al conflicto social y armado es otra bandera que se ha enarbolado en el contexto de las jornadas iniciadas desde el 13 de mayo.

El país seguirá organizándose desde una estratégica unidad capaz de afrontar los retos que todos tenemos y debemos asumir.

Hoy el movimiento popular colombiano se sitúa a la altura de las grandes tareas movilizadoras. Las jornadas de mayo del año en curso señalan el camino a seguir transitando.

“Necesitamos encontrarnos todos y todas para seguir tejiendo las luchas de la resistencia organizada por la vida” fue el mensaje contundente del movimiento indígena, recogido por todos los que estamos comprometidos en la construcción de una Colombia con justicia social, soberanía y paz.

LAS CUMBRES DE VIENA, BATALLAS DE RICOS Y POBRES

En Viena, Austria, se reunieron a mediados de mayo varias Cumbres. La de los Jefes de Estado y de gobierno de 58 países, 33 de América Latina y el Caribe y 25 de la Unión Europea (Cumbre ALC-UE); la Cumbre de los Pueblos llamada Enlazando Alternativas 2, con la participación de representantes de 200 organizaciones sociales y políticas de América Latina, Caribe y Europa, y la Primera Cumbre de los empresarios de ALC-UE. Paralelamente, sesionó un Tribunal Permanente de los Pueblos, sobre las políticas neoliberales y las transnacionales europeas en Latinoamérica.

Fue una semana plena de confrontaciones de ideas y de propuestas. Las de los pueblos por su bienestar, soberanía y desarrollo, se estrellaban en los escenarios y en los medios con las de los empresarios y la mayoría de los jefes de Estado, impregnadas éstas de neoliberalismo y ganancias para las transnacionales.

Las declaraciones finales de las Cumbres no pueden ser más evidentes. Aunque se encuentran términos similares sustantivos, los adjetivos que nuestros pueblos exigen marcan la diferencia.

El concepto que más se escuchó estos días en Viena fue el de integración. Para Europa, los empresarios y buena parte de los mandatarios de este lado del mar, este mandato bolivariano y solidario, está lleno es de posibilidades de inversión oportunista, de libre flujo de capitales, de posibilidades de ganancia.

Para nuestros pueblos y los gobiernos alternativos y progresistas, la integración es la única posibilidad de desarrollo solidario y bienestar. Unirnos contra los imperialismos y sus transnacionales, complementar nuestras economías y nuestras inteligencias, recuperar los recursos naturales y ponerlos al servicio de nuestro desarrollo y de la justicia social. Es el camino que trazan el ALBA y los TCP.

La pesadilla de los TLC (tratados de libre comercio), se trasladó a Viena en boca de los empresarios y los mandatarios. Ahora es con Europa. Los ejemplos de buen país, de buen comportamiento recaen en Chile y en México. Las economías de estos países van bien, pero como en Colombia, sus pueblos van mal. Los grandes acumulados de crecimientos se perciben en las bolsas de valores y en los balances de las empresas, mientras la cifras de pobres y hambrientos crecen cada día, acompasadamente.

El comercio es el llamado a unirnos como siempre. Europa llama a la integración y a la asociación. Los subsidios que les entregan a sus agricultores pasan de los 100 mil millones de euros. Esto deja por fuera cualquier posibilidad de que los productos agrícolas y agroindustriales de América Latina y el Caribe, lleguen a sus mercados. MERCOSUR ni siquiera programó una cita posterior a esta Cumbre con la UE.

Con Centroamérica, el Caribe y con Comunidad Andina de Naciones sin Venezuela, la UE proclamó su decisión de avanzar en la asociación, es decir, un nuevo ALCA, pero ahora con los europeos.

Temas como terrorismo, democracia y derechos humanos, fueron tratados por los señores que participan en la alianza criminal con el imperialismo yanqui contra el pueblo de Iraq.

La lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión fue otro de los puntos discutidos entre los dueños de un tercio de la economía del mundo y los presidentes de estos países repletos de pobres e indigentes.

El párrafo 36 de la Declaración final se transcribe como ejemplo y podría ser firmado por las dos Cumbres, en consenso: “36. Destacamos nuestro compromiso para erradicar la pobreza, la desigualdad, la exclusión social y todas las formas de discriminación para mejorar las condiciones de vida de todas las personas y de todos los grupos, así como consolidar la gobernabilidad democrática y lograr una mayor justicia social y un desarrollo sostenible.”

Parodiando a Dante Alighieri de Declaraciones como esta, está lleno el camino al Infierno.

La Cumbre de los Pueblos tuvo una fuerte participación social europea y contó con la presencia de los compañeros presidentes Hugo Chávez y Evo Morales y con el vicepresidente de Cuba compañero Carlos Lage.

La lucha contra la guerra, por el multilateralismo, por la justicia social, por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, también el derecho de las mujeres y la juventud contra la exclusión social, marcaron el debate y los ejes finales que se proponen para la confrontación:

“1. No a los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea con América Latina y Caribe. No a este “ALCA” europeo, y a la creación de cláusulas de seguridad y militares para defender los intereses del capital.

2. No a la profundización de los acuerdos de libre comercio con México y Chile y a la concreción de Acuerdos de libre comercio con Centroamérica, la región Andina y el MERCOSUR,

3. Sí a la abolición de la deuda externa de América Latina y el Caribe con los países de la Unión Europea y el reconocimiento de la deuda histórica contraída. ¡No debemos, no pagamos! ¡No somos deudores, somos acreedores!

4. No al Tratado de Constitución Europea. No a la represión de las y los migrantes. No a la “Europa Fortaleza”. No a la Directiva Bolkestein¹, y a la privatización de los servicios públicos en la Unión Europea.

¹ La Directiva Bolkestein impulsa la liberalización de los servicios y la presión a la baja de los estándares laborales, y por tanto la crisis del Estado social, la amenaza a sus agricultores, a la soberanía alimentaria, y la generación de un clima hostil en el que proliferan la desintegración social, la xenofobia, la violencia de género, la violencia urbana y otros síntomas.

5. A fortalecer la unidad y confluencia bi-regional de los movimientos sociales de ambos continentes para alcanzar otro mundo posible, justo, equitativo, antipatriarcal y en paz con el planeta”.

La Cumbre borrascosa de los presidentes en Viena se estrelló contra la que bien llamó el vicepresidente cubano la verdadera Cumbre de Viena. Los pueblos son protagonistas de batallas en estos tiempos de globalización donde ningún lugar está vedado para nuestras luchas.

Viena fue escenario de confrontaciones que muestran los tiempos de cambio y renovación, de transformaciones y búsquedas en América latina y el Caribe. Los pueblos de Europa confirmaron que la historia no tiene fin.